

8- NORMATIVA Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES

PRINCIPIOS BÁSICOS ONU SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA (PRINCIPIOS 4, 5 Y 9)

Esto se reitera en **el principio 4** de los Principios Básicos: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”. Es decir, los agentes del orden público solo deben usar la fuerza cuando es absolutamente necesario para lograr un objetivo de orden público legal y legítimo. Además, el tipo y nivel de fuerza utilizada debe ser capaz de alcanzar dicho objetivo. Así, antes de recurrir a la fuerza, los agentes de orden público deben preguntarse: ¿es posible lograr el mismo objetivo sin usar la fuerza? Por ejemplo, ¿es posible lograr el mismo objetivo sin usar la fuerza? Véase el Informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público posible pedir la cooperación, en lugar de coaccionar? ¿Es posible negociar o mediar? Si lo es, dichas alternativas no violentas deben intentarse y agotarse antes de recurrir a la fuerza. Además, los agentes del orden público deben recurrir a una medida de fuerza solo si dicha medida puede aliviar la amenaza presentada. Cuando se recurra a la fuerza, los agentes de orden público deberían usar el mínimo necesario para alcanzar el objetivo de mantener el orden. Emplear el uso de la fuerza que supere el mínimo requerido se consideraría uso innecesario de la fuerza y, por ende, una violación de las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional. Más aun, el principio de necesidad incluye un componente temporal, indicando que el uso de la fuerza solo se puede ejercer hasta que el objetivo de orden público se cumpla o se pueda cumplir. Una vez que el objetivo fue cumplido o es claro que ya no puede ser cumplirse, el empleo de la fuerza se vuelve innecesario y debe

detenerse. Los agentes del orden público nunca deben usar la fuerza para intimidar o para extraer información, ni utilizarla contra un presunto infractor que ya se encuentra bajo control o en custodia policial –a menos que sea en defensa propia o en defensa de otras personas frente a una amenaza inminente. Cuando una persona sometida a la fuerza ha sido controlada o es incapaz de resistirse, el uso adicional de la fuerza sería innecesario y, por ende, ilegal; el empleo de la fuerza en este caso podría constituir agresión con lesiones, o incluso tortura o malos tratos.

El principio 5 de los Principios Básicos dice: “Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lo ejercerán con moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga.” Cualquier agente del orden público que esté contemplando el uso de la fuerza debe considerar el equilibrio entre el tipo y nivel de fuerza utilizado, el nivel de daño que puede causarle a la persona y la amenaza que este representa. El objetivo de orden público que se persigue está vinculado al nivel de amenaza que representa la persona para el cumplimiento de la ley. Así, una consideración importante para establecer una respuesta proporcional, es el nivel de amenaza a la vida y a la propiedad que se está experimentando⁴⁸. Cuando el daño causado por el empleo de la fuerza sobrepasa las ventajas de su uso (la consecución del objetivo de orden público), la utilización de la fuerza es desproporcionada; esto puede significar que el agente del orden público aborte la operación. Por ejemplo, si capturar a un ladrón de un caso menor requeriría el uso de armas de fuego (es decir, fuerza potencialmente letal), los agentes del orden público deberían abstenerse de usar dicha fuerza aun si esto significa que el ladrón pudiera escapar. La legislación nacional debería garantizar que el principio de proporcionalidad esté debidamente considerado en el mantenimiento del orden público y que los agentes no sufran consecuencias negativas por abortar operaciones en estos casos. Para dar sentido a los principios de necesidad y proporcionalidad, el personal de las fuerzas de orden debe poder elegir entre una gama de instrumentos y técnicas para el uso de la fuerza, y así poder optar por la opción menos intrusiva y más proporcional, dadas las circunstancias, para alcanzar el objetivo de orden público legítimo.

El principio 9 del BPUFF señala que un agente del orden público no usará armas de fuego contra las personas excepto:

• En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves⁵⁹, • Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que suponga una seria amenaza para la vida, • Para detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y • Solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. El comentario oficial al artículo 3 del Código de conducta de Naciones Unidas declara que “no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas”. Por lo tanto, las armas de fuego no deben usarse para efectuar un arresto o impedir una fuga o para dispersar o controlar una multitud, a menos que las personas objeto de dicha fuerza representen una amenaza inminente o continua de muerte o herida grave. Se desprende que tan pronto como ya no exista una amenaza a la vida o la seguridad física, las armas de fuego no se pueden usar legalmente. Dado que las armas de fuego solo pueden ser empleadas para proteger la vida humana o evitar lesiones graves, se entiende que una amenaza contra la propiedad no puede justificar su uso contra una persona. Las armas de fuego no se pueden utilizar para impedir un robo o para resguardar otros intereses como la propiedad (incluyendo la propiedad pública, como edificios gubernamentales), salvo si uno de dichos incidentes esté acompañado de una amenaza inminente de muerte o lesiones graves⁶⁰. Nunca se debe disparar a un ladrón que se dio a la fuga y no presenta un riesgo inmediato, aun si eso quiere decir que escapará⁶¹. Del mismo modo, no se debe disparar o matar a alguien que conduce a través de una barrera, pero que no presenta ningún otro riesgo inmediato aparente.

El principio 9 del BPUFF restringe el uso de armas de fuego a situaciones donde hay una amenaza a la vida o de lesiones graves. La fuerza aplicada se debe orientar a detener el riesgo o el peligro. Sin embargo, en raras ocasiones, la única forma de alcanzar este objetivo es matando a la persona que representa dicha amenaza. En estas situaciones, el BPUFF señala que los agentes de orden público pueden recurrir al “uso letal intencional de armas de fuego”; en el principio 9 estipula que “solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. Este umbral es más elevado que el del uso de fuerza potencialmente letal, que también se permite para evitar heridas graves. Es importante distinguir entre órdenes de disparar a matar durante operaciones concretas y políticas de disparar a matar. El uso letal intencional de armas de fuego solo puede ser legítimo cuando es estrictamente inevitable para

proteger la vida en una situación particular; cualquier otra razón para un asesinato intencional constituye uso arbitrario de la fuerza y posiblemente una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, lo cual es una violación grave de derechos humanos.

Cualquier política o cualquier orden que permita el empleo letal intencional de un arma de fuego con un propósito que no sea proteger la vida, siempre infringirá el principio 9 del BPUFF. Sin embargo, durante una operación en particular, cuando un objetivo identificado es representado como una amenaza para la vida y solo cuando no hay otros medios disponibles para reducir dicha amenaza, se puede dar una orden de "disparar a matar"; por ejemplo, con un dinamitero suicida que se encuentra listo para detonar su artefacto explosivo o en un escenario de "francotirador activo", donde la persona ya ha utilizado fuerza letal o potencialmente letal y demuestra la intención de continuar empleándola y, por ende, presenta una amenaza para más personas. Debido a los riesgos inherentes a dicha operación, la autorización debe venir del nivel superior, y el disparo debe ser llevado a cabo por especialistas altamente entrenados⁶². Una situación donde se cree que una sola persona identificada está punto de causar una inminente pérdida masiva de vidas, es una situación extremadamente inusual y en la mayoría de los casos habrá una alternativa para afrontarla; probablemente esta pueda ser arrestar a la persona sospechosa y ponerla bajo custodia o considerar otro tipo de fuerza, o usar la fuerza en un momento más conveniente. Cuando la única opción posible para salvar una vida es disparar a la persona sospechosa (y continuar disparando) hasta su muerte, dicha decisión "debería tomarse en un momento tan cerca como sea posible al momento preciso del tiro, para permitir que la persona sospechosa en cuestión cambie de idea y retire la conducta que representa una amenaza para la vida de otras personas"⁶³. Esto indica que tal decisión debe basarse en un análisis de caso a caso por la amenaza representada en una situación en particular. Además, en el marco de la rendición de cuentas, dichas decisiones deben ser registradas e informadas con razonamientos claros, para la evaluación y el escrutinio futuro. Es una buena práctica informar sobre cualquier instancia de uso de armas de fuego.